

Región



La Región de Tarapacá vuelve a quedar en el centro del debate nacional sobre seguridad, narcotráfico y crimen organizado. No solo por su condición de territorio fronterizo, sino porque los últimos años han confirmado un fenómeno que las autoridades policiales y judiciales vienen advirtiendo con fuerza: la zona norte ya no puede ser vista únicamente como un punto de ingreso irregular o de tránsito ocasional, sino como un corredor estratégico para organizaciones que buscan mover droga, vehículos, dinero y contrabando hacia otras regiones de Chile y también hacia países del Cono Sur.

El tema volvió a tomar fuerza durante la visita a Chile de la senadora y excandidata presidencial argentina Patricia Bullrich, quien en entrevista con Meganoticias abordó el escenario de seguridad del país, la situación fronteriza, la zanja que se construye en el norte y la necesidad de mayor coordinación regional. "Me encontré un Chile que está con muchos desafíos y con un gran problema de seguridad. Hay que darle tiempo", señaló, aludiendo a la expectativa generada por las promesas del gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de combate al crimen organizado.

La exministra argentina fue más allá y apuntó directamente a la dimensión transnacional del problema. "Creo que ahora va a poder mejorar muchísimo el triángulo Chile-Bolivia-Argentina, porque Iquique es uno de los lugares de donde sale contrabando hacia Bolivia, de Bolivia a la Argentina", sostuvo. Su frase no pasó inadvertida en Tarapacá, una región que desde hace años convive con el impacto del contrabando, el tráfico de drogas, el robo de vehículos, la migración irregular y la instalación de bandas

con capacidad logística para operar en rutas complejas.

DIAGNOSTICO

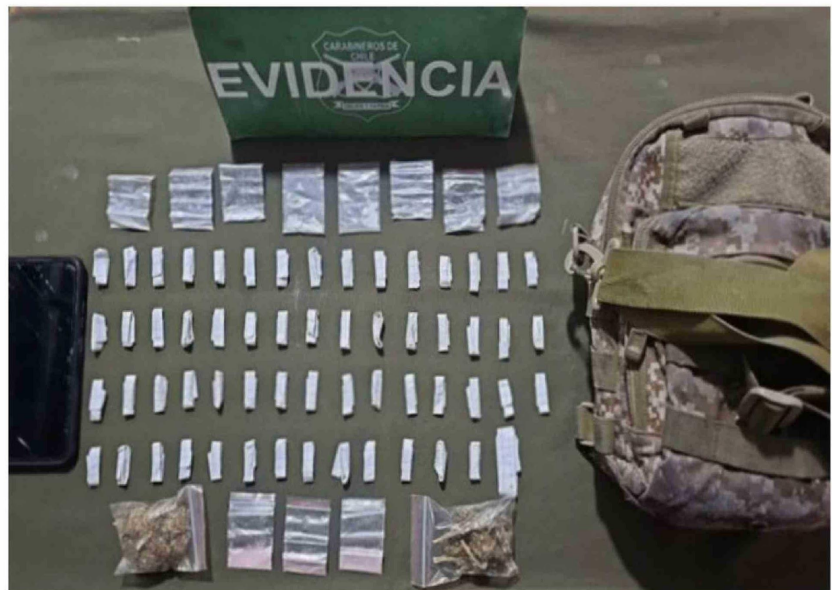
El diagnóstico de Bullrich coincide con una preocupación que en la macrozona norte dejó de ser excepcional. Tarapacá, por su ubicación, su conexión con Bolivia, su actividad portuaria, su zona franca, sus rutas interiores y su cercanía con pasos formales e informales, se ha convertido en un territorio altamente sensible para las operaciones del crimen organizado. La droga que ingresa o circula por la región no necesariamente permanece en ella; muchas veces es acopiada, fragmentada, redistribuida o enviada hacia la zona central, el sur del país o incluso hacia circuitos internacionales.

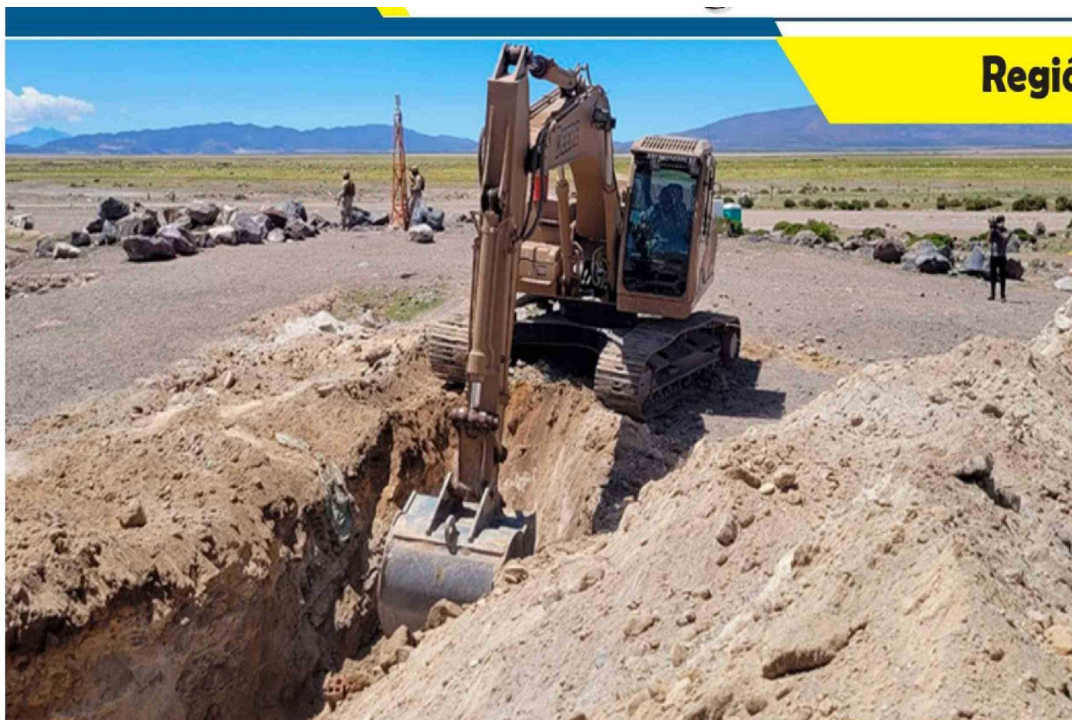
Los decomisos recientes muestran una actividad policial intensa. En marzo de 2026, Carabineros incautó en Tarapacá más de 222 kilos de marihuana durante una fiscalización vehicular, equivalentes a más de 440 mil dosis que, según informó la institución, serían trasladadas hacia el sur del país. El procedimiento volvió a confirmar que las rutas regionales son utilizadas como corredores de salida para cargamentos de alto volumen.

El mismo patrón se observa en investigaciones de mayor escala. Un reporte publicado en junio de 2025 consignó que, a esa fecha, el OS7 de Carabineros en Tarapacá había decomisado 2.818 kilos de sustancias ilícitas, incluyendo pasta base y clorhidrato de cocaína, además de la desarticulación de 14 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y delitos asociados. El mismo antecedente vinculó directamente a la región con el rol de corredor de droga proveniente desde Bolivia.

Tarapacá bajo presión: narcotráfico, contrabando y frontera norte tensionan la agenda de seguridad del país

Las declaraciones de la senadora y ex ministra trasandina, Patricia Bullrich, sobre Iquique, Bolivia y Argentina reabren el debate sobre el rol estratégico de Tarapacá en las rutas ilícitas del Cono Sur, mientras los decomisos evidencian golpes relevantes, pero también una presión criminal persistente en la macrozona norte.





Región

OTRAS NACIONES

La situación también interpela a Bolivia y Argentina. Si parte de la droga ingresa desde Bolivia, si el contrabando sale desde Iquique hacia territorio boliviano y luego puede proyectarse hacia Argentina, el combate requiere acuerdos operativos, intercambio de información, acciones simultáneas y persecución de redes completas. De lo contrario, cada país seguirá golpeando fragmentos de una cadena que se reorganiza rápidamente al otro lado de la frontera.

En Tarapacá, el narcotráfico ya no puede ser abordado solo como un problema policial. Es un fenómeno territorial, económico, social y geopolítico. Afecta la seguridad de los barrios, tensiona a las instituciones, utiliza rutas internacionales y se alimenta de las brechas de control en zonas extensas y complejas. Los decomisos muestran que hay capacidad operativa, pero también revelan la profundidad del desafío. El norte de Chile, y particularmente Tarapacá, está en una zona decisiva para el futuro de la seguridad nacional. Si el Estado logra cerrar corredores, golpear patrimonios criminales y coordinarse con sus vecinos, podrá debilitar estructuras que hoy usan la región como plataforma. Pero si la respuesta se queda solo en anuncios, cifras o medidas parciales, el crimen organizado seguirá adaptándose.

La advertencia que deja este nuevo debate es clara: Tarapacá no puede seguir siendo mirada desde Santiago como una periferia lejana. Es una frontera viva, un punto logístico clave y una región que está pagando costos concretos por un fenómeno criminal que ya opera con lógica transnacional. En esa realidad, cada decomiso importa, pero la verdadera victoria será impedir que la droga siga encontrando en el norte una ruta abierta hacia Chile, Bolivia, Argentina y el resto del Cono Sur.

Sin embargo, la magnitud de los decomisos también abre una pregunta incómoda: si las incautaciones aumentan, ¿significa que el Estado está golpeando con mayor eficacia a las bandas o que el volumen de droga que circula por la zona es cada vez mayor? En Tarapacá, ambas lecturas parecen convivir. Por un lado, las policías, Fiscalía y servicios de control han logrado retirar grandes cargamentos de circulación. Por otro, la persistencia de hallazgos, detenciones y operaciones sucesivas demuestra que las organizaciones siguen viendo en el norte una ruta rentable, flexible y difícil de cerrar por completo.

Ese punto es clave para entender el impacto regional. El narcotráfico no solo afecta a Tarapacá cuando un cargamento es detectado. También golpea la convivencia cotidiana, la seguridad de barrios, la violencia asociada a disputas territoriales, el uso de vehículos robados, el porte de armas, el lavado de activos y la instalación de economías ilegales que contaminan actividades formales. La droga que cruza el desierto no viaja sola: a su alrededor se mueven redes de financiamiento, transporte, vigilancia, corrupción, amenaza

y reclutamiento.

PREOCUPACIÓN REGIONAL

La preocupación se extiende además hacia la relación entre Tarapacá y otras regiones. Cuando un cargamento sale desde Iquique, Alto Hospicio, Colchane o rutas interiores con destino al centro o sur del país, el problema deja de ser local. Se transforma en una cadena nacional de abastecimiento criminal. Por eso, los decomisos en Tarapacá no pueden analizarse solo como cifras policiales regionales, sino como parte de una disputa mayor por cortar corredores logísticos que conectan frontera, puertos, carreteras y mercados de consumo.

En esa línea, lo ocurrido en regiones vecinas también refuerza el diagnóstico de la macrozona norte como espacio crítico. En febrero de 2026, la Fiscalía y la PDI informaron una histórica incautación de 2,4 toneladas de cannabis en la provincia de El Loa, droga que había sido acopiada en Calama y era trasladada hacia la zona central para su distribución, dosificación y venta. La Fiscalía Regional de Antofagasta sostuvo entonces que, solo en esa región, se registraban 15

toneladas incautadas durante el año y 80 toneladas en los últimos 28 meses.

Más recientemente, autoridades de Antofagasta informaron la incautación de 4.831 kilos de droga, entre marihuana y ketamina líquida, en una operación que involucró el uso de un camión cisterna como método de ocultamiento. Ese procedimiento fue presentado como una de las mayores incautaciones de los últimos 25 años a nivel nacional y volvió a evidenciar la sofisticación de las redes que operan en el norte.

Aunque esos casos corresponden a Antofagasta, su relevancia para Tarapacá es directa. Ambas regiones comparten dinámicas fronterizas, rutas de conexión con Bolivia, extensiones desérticas de difícil fiscalización y presencia de organizaciones que no operan bajo límites administrativos. La criminalidad organizada se mueve por oportunidades, no por mapas regionales. Por eso, una incautación en Calama, Colchane, Iquique o la Ruta 5 forma parte de un mismo tablero de seguridad.

En este contexto, las declaraciones de Patricia Bullrich sobre la necesidad de un trabajo mancomunado entre Chile, Bolivia y Argentina apuntan

a un aspecto central: ningún país puede enfrentar solo un fenómeno que funciona precisamente aprovechando las debilidades de coordinación entre Estados. "Una crítica que siempre he hecho a los líderes de la región es que nos falta un poco más de trabajo de mancomunado", afirmó la senadora argentina, planteando que el llamado triángulo Chile-Bolivia-Argentina requiere una estrategia común.

ZANJA FRONTERIZA

La referencia a la zanja en la frontera norte también forma parte de esa discusión. Consultada por esta medida, Bullrich señaló que, si los equipos técnicos han evaluado que es útil para impedir determinados cruces, entonces puede ser considerada una herramienta válida. Sin embargo, el debate de fondo es más amplio: una zanja, un control carretero o una barrera física pueden dificultar rutas específicas, pero no reemplazan la inteligencia policial, la persecución patrimonial, el control portuario, la fiscalización de carga, la cooperación internacional y el seguimiento del dinero.

Tarapacá necesita una política de seguridad que entienda su

condición de región estratégica. No basta con reforzar patrullajes en puntos visibles ni con celebrar decomisos aislados. Se requiere una mirada integral que combine frontera, barrios, puertos, carreteras, comercio, aduanas, migración, fiscalización financiera y protección de comunidades locales. La droga que se mueve por la región no solo deja daño en los grandes procedimientos; también deja miedo, presión social y deterioro de la vida cotidiana en sectores donde las familias sienten que el crimen organizado avanza más rápido que el Estado.

La dimensión política del problema es evidente. Las promesas de campaña en seguridad generan expectativas altas, especialmente en territorios como Tarapacá, donde la ciudadanía exige resultados concretos. Bullrich lo expresó con claridad al señalar que "lo importante es el camino" y que, si ese camino es correcto, "el resultado va a venir". Pero en regiones del norte, el tiempo político suele chocar con la urgencia social. Las comunidades no solo esperan planes, sino presencia efectiva, controles sostenidos y señales claras de que el Estado tiene capacidad de anticiparse y no solo de reaccionar.